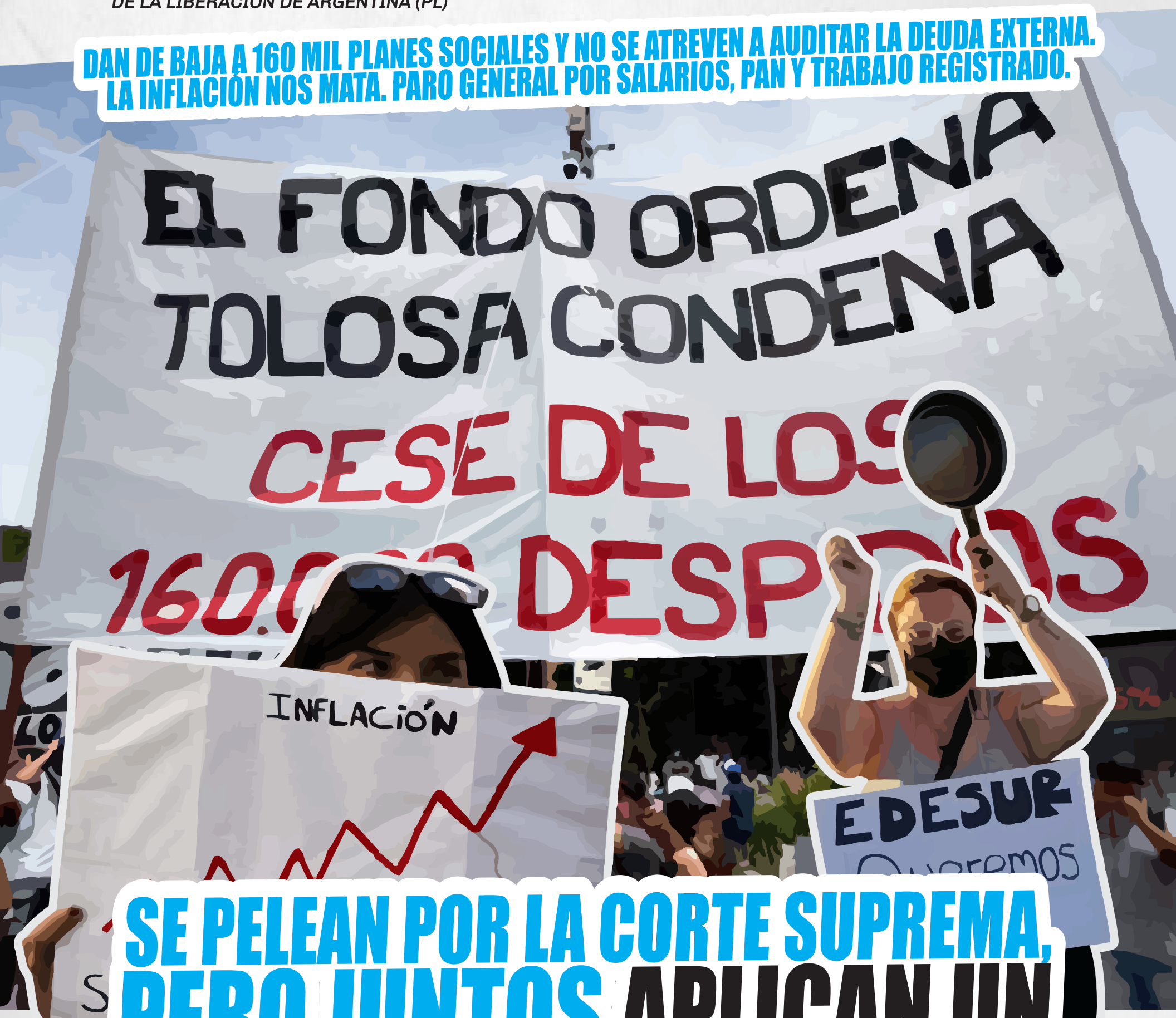
LIBERACIÓN

EDICIÓN DIGITAL

Año 42
N° 398
21 de Febrero de 2023
www.partidodelaliberacion.com.ar

ÓRGANO DE PRENSA DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DE ARGENTINA (PL)

DAN DE BAJA A 160 MIL PLANES SOCIALES Y NO SE ATREVEN A AUDITAR LA DEUDA EXTERNA. LA INFLACIÓN NOS MATA. PARO GENERAL POR SALARIOS, PAN Y TRABAJO REGISTRADO.



SE PELEAN POR LA CORTE SUPREMA, PERO JUNTOS APLICAN UN SUPREMO AJUSTE CON EL FMI

EL GOBIERNO REPRIME A LOS MAPUCHE PAG.5

MALVINAS SON ARGENTINAS, LAGO ESCONDIDO TAMBIÉN PAG. 12

VIVA LA REBELIÓN POPULAR EN PERÚ PAG. 18

NOTAS POLÍTICAS
LO DECISIVO NO SON LAS ELECCIONES

Hay que denunciar, luchar, organizar, politizar y unir

La crisis es cada vez más grave. Y tiene manifestaciones concretas como la baja de 160.000 Potenciar Trabajo dispuestas por el gobierno, en línea con el ajuste acordado con el FMI. Otra expresión es el aumento de la inflación, que perjudica sobre todo a los que tienen ingresos fijos e insuficientes en pesos. El INDEC difundió la inflación de enero, que fue del 6 por ciento. El verso de Sergio Massa, de que en abril la inflación bajaría al 3, quedó como una mentira más.

Incluso dependencias del gobierno admiten el ajuste. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que hubo un fuerte ajuste de gastos de capital durante 2022: la inversión pública ejecutada bajó el 38,3 por ciento ese año. Esto fue parte del duro ajuste para cumplir el acuerdo con el FMI pues así el gasto real de la administración pública nacional cayó el 7,4 por ciento. En 2022 la inversión pública fue del 1,4 por ciento del PBI, cuando había sido del 2,4 en 2021.

Lo que no dice esa Oficina, por razones obvias, es que ese ajuste tiene por causa fundamental el cogobierno con el FMI y el cumplimiento del acuerdo.

Este es el panorama. La oposición derechista de Juntos por el Cambio, que fue artífice de la deuda con el préstamo de 2018 del Fondo, ahora hace demagogia y dice que la economía es "una bomba a punto de estallar". El gobierno le responde que no, que la enorme deuda en pesos, de 33 billones de pesos, será reprogramada (claro que pagando cientos de miles de millones de pesos por nuevas letras y más Leliq a los bancos). El oficialismo dice que las dificultades tienen que ver con el enorme endeudamiento macrista, aunque omite que el FDT lo convalidó en marzo de 2022 y lo está pagando.

O sea que hay una crisis no sólo económica y financiera sino sobre todo política, y tiene dos grandes responsables, de adentro y de afuera. Los de adentro en política son principalmente el macrismo en la génesis de la deuda, y el peronismo en su desarrollo y agravamiento. Los culpables de afuera son EE UU, el capital financiero internacional, los bancos, los bonistas y los monopolios, de allá y de acá.

Esta es una bomba que explota todos los días, camino a una megaexplosión y megacrisis, de esas que causan salidas de gobiernos, represiones feroces como en 2001 y aparición de nuevas fuerzas políticas y sociales. Esto último suele ser el único aspecto positivo de crisis que provocan mucho dolor, muertes, hambre, cierres de fuentes de trabajo, etc.

DENUNCIAR, LUCHAR, ORGANIZAR, POLITIZAR Y UNIR

En esta situación tan dramática y donde los de arriba generan tanta confusión política dentro del pueblo, es esencial denunciar a los grandes responsables, mostrando con ejemplos concretos los daños que causan. Alverso Fernández debe pagar por el ajuste que viene haciendo, pero otro tanto y más debemos facturarle a Macri y Cía. Siempre hablamos del prontuario de Javier Milei porque este fascista onda Bolsonaro aún engaña a bastante gente, sobre todo joven. Hay que sacarles todos los trapitos sucios al sol, para que la gente común los vea y no se deje engañar. Y que no nos vengan con que si denunciamos el ajuste actual somos "funcionales a Macri" y otras boludeces por el estilo K de los últimos años.

Nuestras críticas no pueden quedarse en la palabra, la asamblea, la pintada, el volante y las redes sociales, sino plasmarse en luchas. Hay que impulsar las asambleas de trabajadores en las escuelas ahora que comienzan las clases, en los hospitales, las fábricas y gremios, proponer paros y planes de lucha. Salir a las calles. Eso, aunque los fascistas como Espert amenace con "Cárcel o balas" para los que cortan calles; ahora lo repitió como amenaza contra Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Vaya nuestra solidaridad para con él.

Esas luchas tienen un alto nivel de espontaneidad, pero se necesita un mejor grado de organización, para sumar más compañerxs a cada movilización. El activismo no tiene que cortarse solo. Entre marcha y marcha hay que buscar más trabajadores para que se pongan en movimiento. Las soluciones no van a caer de arriba. Hay que elegir delegados en una fábrica y comisión interna, formar una agrupación sindical, crear un merendero popular, fundar una agrupación estudiantil, acordar entre partidos políticos populares en base a un programa, fortalecer el PL, etc.

En ese trabajo de masas en diferentes frentes es decisivo la politización, o sea no quedarse en la mera reivindicación del Plan o del aumento salarial – todas banderas legítimas y súper importantes – sino elevar la puntería al plano político. Hay que denunciar a los responsables de nuestros dramas, en el gobierno y la oposición, los monopolios y el FMI. Y sobre todo mostrar por la positiva cuál debe ser el camino de solución popular. En el campo popular hay que desarmar las afirmaciones de "yo soy apolítico", porque desde Aristóteles se sabe que el hombre es un animal político. Tampoco es cierto que "todos los políticos son ladrones", como dice el ladrón Milei: nosotros y muchos otros militantes somos políticos y no somos ladris.

También es necesaria la Unidad. No cualquier unidad ni una centrada en lo electoral. Tiene que ser una unidad antiimperialista y popular, con todas las fuerzas de ese signo, en la práctica, sin sectarismos ni dogmatismos, trabajando y debatiendo a la par, luchando juntos, sin figurettis ni aparateadas, sumando para empujar a favor de una salida antimonopólica a esta crisis.

Si así no lo hacemos, seremos derrotados y frustrados otra vez. Si así lo hacemos, podemos dar pelea y abrir un ciclo de liberación nacional y social para nuestro pueblo, que hoy no pasa por las elecciones. Más adelante se verá qué votar. ■

Sólo desde la calle vendrán las soluciones.

EDITORIAL

Romper el bipartidismo del ajuste y la dependencia

El gobierno peronista del Frente de Todos y la oposición macrista de Juntos por el Cambio se están peleando cada vez más. Lo harán más a medida que se internen en la campaña para las PASO de agosto y las elecciones de octubre.

En diciembre pasado la disputa entre ambos giraba en torno a la condena que la justicia macrista emitió contra Cristina Fernández, que venía de sufrir tres meses antes un atentado. Para JxC la condena estaba bien porque la vicepresidenta sería una corrupta. Para el oficialismo era más "guerra jurídica" contra una estadista.

Ahora la disputa de las dos coaliciones es por el juicio a la Corte que el presidente Fernández y 12 gobernadores decidieron tardíamente impulsar en el Congreso, aún a sabiendas que no cuentan con números para llevarlo a cabo. Lo empujan igual para sacar a luz, con 14 buenas acusaciones, que el Poder Judicial protege a las corporaciones y la derecha. Obvio, esta jugada apunta también a defender a Cristina de los juicios y esa condena.

El macrismo y bancadas menores no están de acuerdo con enjuiciar a la CSJN, como si esa "justicia" fuera una maravilla. Hay una devolución de favores: vos atacás al gobierno actual y fallás a favor nuestro (por ejemplo aumentando la coparticipación federal del gobierno macrista de CABA), y nosotros te defendemos. Vos fallás a favor de Clarín para que pueda subir tarifas en servicios esenciales, y nosotros te apoyamos...

La condena a CFK y el intento de juicio a la Corte Suprema no son temas insignificantes. El PL tiene posición tomada. Considera que esa fue una condena injusta, sin pruebas concretas, que quiere proscribir de por vida a la vice. Sobre el juicio, es un manotazo de ahogado del gobierno, que claudicó ante los cuatro cortesanos durante más de tres años incumpliendo su promesa electoral de reforma judicial. Por supuesto que nos parece bien poner en aprietos al cuarteto de la venda caída que mira la cara del cliente antes de fallar.

NO SON IGUALES, SON PARECIDOS

Una visión superficial de esas polémicas puede hacer creer que son dos fuerzas totalmente enfrentadas y diferentes. No es así. Las dos, sin ser iguales, tienen cosas en común y son parte del problema, no de la solución. Hay cinco temas que comprueban esas afinidades y/o coincidencias básicas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El primero es el ajuste contra el pueblo.

Está fuera de discusión el ajuste que realizó el macrismo contra los trabajadores, jubilados, la educación pública, etc. Y está a la vista el ajuste del FDT en este trienio contra el salario, que sigue sin recuperar lo perdido. "En poder adquisitivo y en dólares, el salario más bajo en dos décadas", escribió Horacio Verbitsky el 5/2 en El Cohete a la luna. "Dos décadas": esta administración y las anteriores, como la de JxC.

El segundo es el acuerdo con los monopolios.

En esto no hay muchas diferencias porque el macrismo hacía políticas para los grandes empresarios y este gobierno pacta con esos mismos personajes y entidades: Daniel Funes de Rioja, COPAL, Paolo Rocca, Techint, Unión Industrial Argentina, Cámara Americana (AmCham). Lleva a sus CEOs al gobierno, como Antonio Aracre, ex Syngenta, hoy jefe de asesores de Alberto Fernández. Esas políticas acentúan el modelo semicolonial sojero, agroexportador y minero, ahora con la novedad del valioso litio.

El tercero es el acuerdo con el FMI para pagar la deuda.

Macri contrajo en 2018 la deuda por 45.000 millones de dólares y en 2022 el actual gobierno la legalizó y comenzó a pagarla, contrayendo nueva deuda por ese mismo monto, cuyo capital habrá que comenzar a abonar desde 2024, en tanto los intereses y sobrecargos se están pagando desde ahora con ajuste contra el pueblo.

El cuarto es la situación de los presos políticos.

Los presos políticos fueron del macrismo, caso de Milagro Sala, presa en enero de 2016, y otros compañeros hasta 2019. Ahora son también presos del Frente de Todos. El presidente se niega a indultar a Milagro y suma nuevos presos como las 4 mujeres mapuche y sus criaturas, detenidas en el operativo represivo del ministro de Seguridad. Aníbal Fernández, y la gobernadora de Río Negro; y más recientemente, a Facundo Jones Huala. El macrismo mató a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, pero no se puede negar que la represión policial sigue.

El quinto es la sumisión al imperialismo yanqui.

Macri nos entregaba al imperialismo, en tiempos de su amigo Donald Trump (de allí el préstamo récord del FMI), las concesiones a los británicos, su rol en el Cartel de Lima, etc. El peronismo, sin llegar a tanto, va por ese camino semicolonial con el amigo de la Embajada, Sergio Massa, en el súper ministerio de Economía. También con las reuniones de Santiago Cafiero con Marc Stanley, del embajador Jorge Arguello con la generala Laura Richardson del Comando Sur (la misma que confesó el interés yanqui por apoderarse de nuestro litio). El año pasado esa generala fue recibida por Cristina en el Senado. Los sindicalistas de CTA y CGT, y los gobernadores desfilaron por el despacho de Stanley. En la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, el gobierno se ha posicionado junto a la alianza imperialista.

Habría más cosas para detallar pero con esto alcanza y sobra. La crisis argentina no se solucionará con más de lo mismo del FDT, ni con éste como mal menor, mucho menos con la vuelta del macrismo en cualquiera de sus variantes neoliberales.

Hay que romper este círculo vicioso, capitalista dependiente, neocolonial, que empuja a la mitad de los 46 millones de argentinos a la pobreza. "Argentinos a las cosas", dijo Ortega y Gasset. A formar un Frente antiimperialista. Es difícil, pero seguir así es alternar entre Guatemala y Guatepeor, cada vez peor. Y queremos vivir en un país soberano, con un pueblo libre y feliz. ■

Juntos a la par.

La Corte Suprema es macrista, pero el FDT no hizo ninguna reforma judicial

Aunque no tiene la mayoría en Diputados para que el juicio prospere, el oficialismo inició el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de InJusticia. Con una ajustadísima votación de 16 a 15 logró aprobar en la Comisión, la admisibilidad del proceso, que seguirá con la presentación de la prueba para que luego pase al recinto para su eventual desarrollo. Eso no ocurrirá, porque no tiene los votos para hacerlo y porque Juntos por el Cambio rechaza este juicio político y así lo manifestó y votó en la Comisión.

Desde el PL nos parece correcto y procedente este juicio político, que busca la destitución de los cuatro supremos. Hace falta una profunda reforma judicial para cambiar de raíz al Poder que se basa en privilegios no sólo de jueces y funcionarios, sino de los poderes concentrados que representa y defiende. Y esa reforma debe empezar por la cabeza: la Corte Suprema.

Pero el gobierno del Frente de Todos, que hoy inicia este proceso en Diputados, tal como lo establece la Constitución Nacional, no puede desentenderse del problema porque ha sido y es parte de él. Dos de los cortesanos (Maqueda y Lorenzetti) fueron designados durante gobiernos peronistas: al primero lo nombró Duhalde y al segundo Néstor Kirchner por consejo de su esposa Cristina.

A Rosatti y Rosenkrantz los designó Macri mediante un decreto abiertamente inconstitucional, pero ese nombramiento fue luego convalidado por el Senado que en aquel momento (2016) tenía mayorista peronista, con Miguel Angel Pichetto a la cabeza. Además Rosatti fue intendente por el justicialismo en Santa Fe, entre 1995 y 1999.

Alberto Fernández no cumplió con su promesa de campaña de reformar el Poder Judicial. Recién en 2021 impulsó una tibia reforma judicial que no fue tratada en Diputados, en ese momento bajo la presidencia de Sergio Massa. Y luego, habiendo perdido la mayoría en esa cámara, tampoco le dio impulso ni promovió movilizaciones ni acciones que pusieran freno a las arremetidas de jueces y cortesanos. Así fueron avanzando, con fallos a favor de los monopolios, como el que dictó la Cámara Contencioso Administrativo y ratificó la Corte Suprema, declarando la inconstitucionalidad del decreto 690/2020, que determinaba el carácter público de la telefonía fija y móvil, el servicio de Internet y la televisión por cable. Fue por una cautelar que promovió Telecom, del grupo Clarín, y el fallo salió a su medida. A partir de allí, los tarifazos en esos servicios son moneda corriente.

A fines de 2021 la Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley dictada por el Congreso Nacional y vigente desde 2006, del Consejo de la Magistratura. Y fue más allá, porque otorgó un plazo para dictar una nueva ley. No hubo acuerdo para dictar una nueva ley y entonces entró en vigencia la ley anterior, derogada en aquel año. Los cortesanos se transformaron en legisladores, violando la división de poderes.

Esos y otros fallos, como el del caso Muiño, que beneficiaba a los genocidas con el 2x1, en 2017, son la base de algunas de las acusaciones del actual pedido de juicio político. Son correctas, pero llevadas tardíamente al recinto y en un año electoral, no le harán ni cosquillas a los cortesanos ni a los demás jueces y funcionarios derechosos, cuyas sentencias salen más rápido o más temprano según el interés que se ventile. Por ejemplo, en el escándalo de los chats de Lago Escondido, el fallo salió rapidísimo desestimando la denuncia porque se basaba en "escuchas ilegales", cuando antes hubo causas como la del Memorando con Irán, que se reabrieron luego de escuchas obtenidas de manera ilegal.

Sobre Rosatti pesan varias acusaciones, una de ellas de una ex detenida desaparecida, Patricia Isasa, quien declaró que el hoy presidente de la Corte encubrió a un represor, Eduardo Ramos, quien la torturó y violó durante su cautiverio. Ramos trabajaba en la intendencia de Santa Fe durante la gestión de Rosatti "y no hizo nada para apartarlo".

El gobierno es corresponsable de la conformación de la Corte, pues no propuso reemplazante para la vacante que dejó la jubilación de Elena Highton. Es verdad que no cuenta con los dos tercios en el Senado para aprobar una eventual candidatura, pero si hubiera tomado esa iniciativa, aunque hubiera sido rechazada por JxC, habría sido un costo político para esa oposición derechosa. Ni siquiera invocaron el fuerte argumento de la perspectiva de género, cuando hay en Argentina muchas juristas mujeres, de prestigio y progresistas, para ocupar ese cargo.

La oposición macrista rechaza el juicio político porque considera que es un nuevo intento del gobierno de "avanzar contra la Justicia", para lograr la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien fue condenada en diciembre del año pasado por un Tribunal Oral, en un juicio que tuvo grandes falencias probatorias.

Clarín, La Nación e Infobae, y sus medios digitales, televisivos y radiales, utilizaron el término "circo" para referirse al proceso iniciado en la comisión de Juicio Político de Diputados. Argumentan que son otros los problemas que preocupan a la gente. El ajuste a salarios y jubilaciones, el endeudamiento con el FMI, la inflación, la precarización laboral, etc., son problemas que el macrismo va a agravar aún más.

Por ello, el proceso de destitución es correcto, porque se trata de una Corte Suprema que defiende y representa los intereses de los monopolios y la derecha, pero el gobierno no puede soslayar la responsabilidad que le cabe en el actual estado del Poder Judicial. Cuando tuvo las herramientas para cambiarlo, no lo hizo. Y acá están las consecuencias. Tarde piaste, FDT.

IRINA SANTESTEBAN

La Corte del espanto.

El gobierno reprime a los mapuche y Jones Huala fue detenido

Normas internacionales y nacionales reconocen los derechos de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan ancestralmente: en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional se reconoce la preexistencia étnica y cultural de esos pueblos, y el derecho a la propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente; diversos pactos internacionales de Derechos Humanos (que tienen rango constitucional en nuestro país) sostienen los mismos derechos; el Convenio 169 de la OIT, así como las Declaraciones Americana y de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la ley 26.160 que declaró la "emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas".

A pesar de ello, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los grandes medios de (des)información siguen insistiendo en discursos que ponen la propiedad privada de la tierra por encima de esas normas, al punto de estigmatizar como violentos o terroristas a quienes defienden los derechos indígenas.

Así, el derecho de las comunidades originarias queda relegado frente a los intereses de grandes terratenientes extranjeros y locales, o el afán de lucro de empresarios cercanos al poder.

En las cotizadas tierras de Villa La Angostura, el gobierno intenta conformar al lof Paicil Antriao y otros con una porción del territorio que ocupan ancestralmente. El lof mencionado presentó este mes una detallada contrapropuesta basada en documentación histórica, consideraciones culturales y uso tradicional del territorio, con lo que reclaman un total de 125 hectáreas. Habrá a quienes esa cifra le suene a mucho... pero debería recordar entonces que en el país hay casi 15 millones de hectáreas en manos extranjeras, que algunos -como Benetton- tienen cientos de miles, y que hay empresas fantasmas registradas en refugios fiscales ("paraísos fiscales") que ostentan propiedades más de mil veces superiores al pedido de la comunidad mapuche. La presencia en la zona de las comunidades Paicil y Antrao ya fue reconocida en 1902 por el gobierno nacional, cuando les cedió tierras pastoriles. Antes de eso, fueron misiones militares las que expulsaron a diversos grupos mapuches de la zona. Para tener una clara idea de la preexistencia de estos pueblos, basta recordar que la Ciudad de Villa La Angostura recién se fundó en 1932.

Otro ejemplo ilustrativo es el de Villa Mascardi, donde es el propio Estado el que promueve el desalojo de las comunidades, junto a algunos particulares y empresas que dicen poseer títulos de propiedad o que acordaron la explotación de las tierras que reclama el fisco. El Lof Lafken Winkul Mapu ocupó territorios ancestrales, ante lo cual el gobierno nacional (con las autoridades de Río Negro y con grupos de propietarios cada vez más violentos) creó un Comando Unificado que dirigió la represión violenta contra el Lof el 4 de octubre pasado, que terminó con la detención de 7 mujeres, niños y bebés. Hasta la fecha, 4 de las comuneras mapuches siguen bajo prisión domiciliaria.

Más recientemente, el Lof Cayunao denunció que se está alambrando ilegalmente en las nacientes del río Chubut. El beneficiario de esa usurpación sería el Emir de Qatar. Ni el gobierno nacional ni el local se pronunciaron al respecto, mientras el cercamiento continúa.

JONES HUALA, OTRA VEZ PRESO

Los gobiernos, la oposición derechista y la gran mayoría de los medios cubre el conflicto con la misma mirada de los terratenientes. Hablan de la violencia de los grupos mapuches, ponen en duda su identidad como pueblo indígena y alientan el miedo en parte de la población de que estas comunidades vienen por sus bienes.

Pero en la zona, a los muertos los puso el pueblo mapuche y quienes apoyan su lucha: Rafael Nahuel, Elías Garay, Santiago Maldonado. Son hombres, mujeres y niñes indígenas quienes sufren el hostigamiento de empresarios y punteros políticos, de grupos violentos que los agreden en el territorio o en las ciudades (así ocurrió con quienes visitaban a un herido en El Bolsón en ocasión del asesinato de Garay).

El Estado despliega su violencia física y legal contra las comunidades a las que califica de "terroristas". En cambio, el grupo de matones que actuó coordinadamente contra quienes marchaban al Lago Escondido (ver nota aparte), no ha recibido ningún adjetivo de parte de los gobiernos y de los medios.

En ese contexto el 30 de enero detuvieron a Facundo Jones Huala, a quien buscan extraditar a Chile. Trascendió que el operativo estuvo a cargo de la policía rionegrina y que el lonko estaba solo en el fondo de una vivienda particular a la que habría ingresado por error y alcoholizado, según autocrítica que hizo en un video.

Los discursos de la prensa (incluso la supuestamente "progresista") desempolvaron las afirmaciones sin sustento del Informe sobre R.A.M. que publicó el Ministerio de Seguridad nacional bajo la conducción de Patricia Bullrich, pese a la falta de evidencias y a la pobreza de las "armas" que adjudican a los mapuches (una pistola, piedras, un par de carabinas, balas viejas y ¡martillos!).

El PL sigue reclamando la libertad de Jones Huala, de las 4 mujeres mapuches, al igual que la de Milagro Sala y demás presos políticos

MARÍA ALANIZ

La deuda, la matriz extractivista exportadora y la distribución regresiva del ingreso

Las elecciones nacionales de este año 2023 y las distintas y principales listas posibles de candidatos demuestran que los sectores dominantes de nuestro país han logrado naturalizar la propuesta excluyente de un modelo extractivista, agropecuario y financiero exportador, que beneficia a las 200 empresas que representan el 70% de nuestras exportaciones, a los grandes terratenientes y a los 10 bancos privados que lideran el sistema financiero local.

Extractivistas como son Río Tinto y Livent en litio y minerales raros, Barrick Gold y Glencore (fuerte participación BlackRock) en oro y cobre, Silvent en plata; petroleras y gasíferas como Chevron, Total, Shell, Pan American Energy, Vista oil, Tecpetrol e incluso YPF SA, a la que se suman las grandes distribuidoras como Pampa Energía (fuerte participación BlackRock), Transportadoras de Gas del Sur y del Norte.

El Registro Nacional de Tierras Rurales creado por la ley 26.737 afirma que el 40% de las 65 millones de hectáreas que dispone el país está en poder de 1.200 titulares, de los cuales 11.790.229,15 hectáreas corresponden a firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales.

La producción agropecuaria que es récord años tras año (con o sin sequía) es acopiada y comercializada mayoritariamente por nueve firmas: ADM, Bunge, Cargill, COFCO, Glencore (fuerte participación de BlackRock), Louis Dreyfus, Aceitera General Deheza, ACA, y Molinos Agro de Pérez Companc.

Los diez bancos privados con mayores depósitos y, a la vez, los mayores poseedores de encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq, y Notaliq), son (en orden de importancia): Santander-Río; BBVA; Galicia; Macro; Credicoop; Patagonia; City; HSBC; ICBC y Supervielle. (En los cuatro primeros tiene fuerte participación BlackRock).

Renta en la que el Estado participa en forma muy menor por la baja tasa de retenciones y la baja recaudación de impuestos a la propiedad, cosa que se agrava por la falta de una empresa nacional clave en cada sector. YPF SA cubre ese rol deficientemente e incluso con acuerdo con Chevron y otras empresas en Vaca Muerta, en que no se le comunica a la población cuál es la participación del Estado y cuál es el destino de esa producción. La chapa para los tubos del tramo Saliquelló a San Jerónimo del gasoducto Néstor Kirchner la financia el BNDS de Brasil, que con alta probabilidad lo continuará haciendo con los tramos que lleguen a San Pablo, corazón industrial del hermano país

El Plan Gas Ar para su distribución fue adjudicado a Pampa Energía, Pan American Energy, y Tecpetrol, y el Ministro de Economía Sergio Massa ponderó el aporte del capital privado. Lo que no se menciona es que esas tres empresas están entre las principales compradoras de dólares en la gestión de Cambiemos y, en sus respectivos balances y demás estados contables no pueden demostrar de donde extrajeron los recursos para comprar la millonada de dólares y tampoco saber que hicieron con esos millones (evasión fiscal y fuga de capitales).

Ranking Activos

Información actualizada a Octubre de 2022

- Importes en miles de pesos -

Orden	Denominación	Importe
001	NACION ARGENTIN	5.742.288.829
002	PR BUENOS AIRES	2.439.108.304
003	BCO GALICIA SAU	2.421.979.003
004	BANCO SANTANDER	2.355.541.838
005	MACRO SA	1.820.367.431
006	BANCO BBVA ARGE	1.666.089.980
007	CREDICOOP COOP	1.166.604.136
008	HSBC BANK	1.020.131.788
009	INDUSTRIAL AND	943.494.593
010	CIUDAD DE BS AS	933.242.981
011	PATAGONIA SA	793.323.696
012	CITIBANK N.A.	729.054.417
013	PROV DE CORDOBA	612.144.230

LA DEUDA Y OTROS CONDICIONANTES

Hay datos irrebatibles de la economía nacional y la deuda externa: en 2015 la deuda externa representaba el 52,6% del PIB, e incluso gran parte estaba en poder de organismos públicos nacionales y provinciales. En 2019 representó el 89,8% del PIB y en forma mayoritaria estaba en poder del capital extranjero. Esto incluye al FMI. El 3 de enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner llegó a juntar 9.500 millones de dólares de los superávit comercial de los siete meses de democracia de 2003, y de los años 2004 y 2005 para cancelar la deuda externa y, de ese modo, el cogobierno con una potencia extranjera. Pero el gobierno de Maurizio Macri volvió a endeudar al país con el FMI por 44.600 millones de dólares.

El gobierno de Alberto Fernández, incumpliendo con su discurso de inauguración de las secciones ordinarias del Congreso de la Nación del 1° de marzo de 2020, no investigó la deuda, pero si la reestructuró, de manera tal que reprogramó los pagos a los poseedores privados de títulos de deuda argentina (bonistas) hasta 2043 (con un período de gracia para pagar el capital hasta el segundo semestre de 2024), y la deuda con el FMI que debía pagarse en tres años, la refinanció hasta 2034.

La deuda la paga el pueblo argentino, primero privándose de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y no a una minoría rentista. En segundo término, con su trabajo cuyas remuneraciones son disminuidas por las constantes depreciaciones del peso, que lleva de un dólar, tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina de $ 9,10 el 9 de diciembre de 2015, a $ 62 el 10 de diciembre de 2019, y a 197 en la segunda semana de febrero de 2023. Y en tercer lugar con un ajuste permanente del gasto público, esencialmente en subsidios a la energía y al transporte, la disminución de las partidas a las provincias, en jubilaciones y pensiones y, hasta en la obra pública.

Esto explica por qué el sala-

Y los monopolios siguen ganando fortunas

Los diversos intentos del gobierno nacional por parar la escalada de precios en los bienes de consumo masivo vienen fracasando. Los alimentos en general, no paran de aumentar, por más programas que acuerden con los supermercadistas y demás cadenas de distribución.

Intentaron con la ley de góndolas, para que hubiese más ofertas de productos, solo algunos lo respetaron a medias y por algún tiempo. Después fue cortando las exportaciones de algunos cortes de carne, pero en definitiva todos los intentos con el tiempo terminan cayendo, en parte porque los controles del Estado no son constantes ni punitivos.

Lo insólito de este último programa de "Precios Justos" es que el gobierno acordó con casi la totalidad de los referentes de las cadenas de distribución, pero resultó que las grandes alimenticias, comenzaron a producir faltantes en el abastecimiento. Ahí se produjo el ofrecimiento del gremio de camioneros como contralor de dicho abastecimiento.

Esto generó el rechazo de la oposición que emblocada con las corporaciones productoras de alimentos, no admitieron ningún control. Saben que el gobierno es débil a la hora de apretar a estos sectores que se creen con total impunidad y cuentan con un poder judicial totalmente cómplice.

Las derechas están envalentonadas en todo el mundo y en especial en la región, donde vimos como golpearon a Lula apenas asumido y lo mismo hicieron los sojeros antes de que asumieran en 2019 Alberto y Cristina, como una advertencia. ¿Se creía acaso Alberto que impondría al poder real una política de precios populares? Equivocado.

Estos sectores jamás le van a permitir bajar la inflación y menos con los precios de la canasta familiar, algo justamente tan sensible y aún menos en año electoral. Pero veamos la otra cara de la moneda. El gobierno por su lado sigue ajustando tarifas energéticas y de transporte, pero además lo hace con los combustibles, que esa es la variable de ajuste para todo lo demás. Al día siguiente que el INDEC cantara 6 por ciento de inflación en enero, Shell aumentó 4 por ciento sus naftas. Y detrás, las demás.

O sea, enseñá con el ejemplo, si fijás precios y tarifas, comencemos por casa y no aceptando las recetas ya archi conocidas del FMI. La desestabilización siempre está a la vuelta de la esquina, como está sucediendo en Perú, pero para lograr apoyo popular, el bolsillo de la gente y la comida, deben ser los garantes del respaldo.

Estuvo bien estatizar IMPSA, pero malísima la marcha atrás con Vicentín, hoy podría ser la referente en manos del Estado, para regular los precios y las exportaciones en muchos productos estratégicos, además de ser un perfecto controlador tanto de almacenaje como punto de referencia, para recuperar la soberanía en las vías fluviales y puertos del Paraná.

Los anuncios del ministro Massa, son siempre cortoplacistas y encima ya preanuncian el piso inflacionario, al permitir que los aumentos dentro de un mes, no superen el tres por ciento. Y vaya si lo superan. La población necesita la certeza de que su salario se recupere en corto plazo y no las ganancias de los empresarios.

En el Partido de la Liberación (PL) tenemos bien en claro que el blanco de la Revolución, tienen que ser los monopolios, desde esa "máxima" que nos dejaran nuestros dirigentes, el transcurrir del tiempo da más certeza de la misma. La concentración y las ganancias extraordinarias siguen acumulándose en las diez principales formadoras de precios en alimentos como Arcor, Aceitera Gral Deheza, Nestlé, La Serenísima, Molinos Rio de la Plata, Bunge, Mondelez, Coca Cola, Ledesma, etc.

JORGE ARTACHO

La deuda... (viene de página 6)

rio promedio determinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (RIPTE) fue de $ 15.600 en diciembre de 2015 (convertido a dólares oficial: 1.715 dólares) y en noviembre de 2022 de $ 184.210,25. (Unos 965 dólares).

Paradójicamente la cantidad de empleo con aportes previsionales (incluidos los trabajadores monotributistas) crece, pero la participación del trabajo sobre el PIB decrece: en 2015 superaba el 50%, en 2019 había caído al 45,7% y en 2022 fue del 43,6%.

El gobierno y el FMI confían en que este año 2023 y tal como está previsto en la ley de Presupuesto de la Administración Nacional, se obtendrán ingresos por exportaciones de mercaderías por 103.000 millones de dólares (en 2022 se alcanzó el récord de 88.500 millones de dólares, ingreso que supera en un 25% al obtenido en años anteriores). Y con ese monto se puede pagar la totalidad de los intereses con el FMI, estimados en unos 3.300 millones de dólares, al elevarnos la tasa a 7,43% anual en dólares; importaciones por unos 83 u 85.000 millones de dólares, la venta a dólar oficial a las empresas para que paguen sus deudas (reales o supuestas) e incluso la venta de dólar oficial de las reservas internacionales del BCRA para que abonen las provincias sus compromisos con el exterior.

El problema pasa a ser la deuda en pesos, tanto las del Tesoro de la Nación, que el Ministro Sergio Massa desde el 8 de agosto 2022 fue canjeando básicamente por Bonos Dual (se ajustan por inflación o por dólar linked-oficial) que según el Ministerio de Economía dice que representa el 24% del PIB, pero la mitad está en manos del sector público y la otra mitad en bancos, compañías de seguro, fondos de inversión, etc., que operan en el país y que tienen intereses en el país y no esperan que derrape para poder cobrar.

El problema de los encajes remunerados (Pases pasivos, Leliq y Notaliq) que a la segunda semana de febrero de 2023 superan los 10,4 billones de pesos, es un problema mayúsculo, pero no estalla por los acuerdos con los diez bancos privados mencionados, que son sus principales poseedores y, a la vez, tienen intereses fuertes en la economía real local, que es básicamente la matriz energética y agropecuaria, como lo demuestran las inversiones en la economía real de BlackRock.

EN SÍNTESIS

La política de endeudamiento de Cambiemos y no investigación del Frente de Todos es funcional al poder económico, fuertemente concentrado y extranjerizado. Es más, su embajador, Marc R. Stanley, no bien asumió el cargo propuso que se fusionen Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, a lo que ambos, por distintas razones, le dijeron que no era posible. Hoy que por cuestiones electorales (y de carrera presidencial) aparecen enfrentados, que Horacio Rodríguez Larreta acuse a este gobierno de irresponsable, cuando ellos nos endeudaron por más de cien mil millones de dólares y nos ataron al FMI, es ridículo.

Ese modelo y esa matriz productiva y distributiva que deberían ser centrales en la discusión de qué país queremos, no están en los debates presidenciales. Deberíamos, en primer lugar, preguntarnos por qué.

HORACIO ROVELLI
El Cohete a la luna

Unidad obrero-piquetera, pasando por arriba a la burocracia sindical

En medio de los festejos por el pase de Argentina a la final de Qatar, los problemas del pueblo trabajador siguen al ritmo del ajuste que viene aplicando el cogobierno del Frente de Todxs con el FMI.

La inflación alcanzó el 85,3% desde enero a noviembre y 92,4% en los últimos doce meses; por ello la mayoría de los gremios solicitaron la reapertura de las paritarias, pese a la resistencia patronal. Así fue posible la negociación de aumentos salariales que en algunos casos superaron el 100% para la paritaria 2022. Claro que esos porcentajes apenas alcanzan a empardar, y en el mejor de los casos a superar por unos pocos puntos, al incesante incremento del costo de vida. La Canasta Básica Total alcanzó en octubre la suma de 140.000 pesos para una familia tipo, el límite de la pobreza. Según CEPA la mitad de los asalariados registrados perciben remuneraciones equivalentes a la mitad de ese monto, lo que grafica el mapa del empleo registrado: trabajadores formales que están en situación de pobreza.

Mucho peor la pasan los y las que están en la economía informal, sean o no beneficiarios de planes sociales, ya que el Potenciar Trabajo, por ejemplo, solo alcanza a 1,3 millón de personas. Y según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en la Argentina la pobreza alcanza al 43,1% de la población, con 8,1% de indigencia. Esta situación afecta a 17 millones de compatriotas en esa lamentable condición.

Y en lugar de diseñar políticas para cambiar esa situación, desde el ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz, se dispuso una revisión de todos los planes sociales (ver nota aparte), como si el problema de la Argentina fuera esa porción de pobres y no los grandes empresarios fugadores de divisas.

Los salarios del sector formal, por su parte, siguen en curso descendente: perdieron 20 puntos porcentuales durante el nefasto gobierno de Mauricio Macri, mientras que en los 3 años que lleva Alberto Fernández esta depreciación se acentuó: hasta agosto, la pérdida era de 8,8 puntos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil alcanzó en diciembre la suma de 61.953 pesos, menos de la mitad de la CBT, y alcanzará en marzo 69.500 pesos. Esos valores están muy por debajo de lo que se necesita hoy para vivir dignamente, por ello la lucha por el salario está siendo lo que moviliza a la mayoría de los sectores en conflicto, evidenciando los ingresos de hambre que padece una gran parte de los trabajadores y las trabajadoras.

El gobierno de Alberto Fernández pondera el presunto crecimiento de la economía durante los tres años de su gestión, pero quienes se beneficiaron con ello no son precisamente los sectores del trabajo. Por eso se abrió el debate sobre la necesidad de otorgar una suma fija de aumento o un bono de fin de año, pero lamentablemente para esa decisión se han tomado mucho tiempo, mientras que para los sectores exportadores sí hubo una inmediata atención a sus demandas, cuando se dispuso aumentar dos veces el valor del dólar para liquidar sus exportaciones.

La CGT se opuso a la suma fija con el argumento que eso tiraba hacia abajo la negociación paritaria, pero no ha impulsado una sola medida, por tibia que fuera, para exigir al gobierno y las empresas una mejora sustancial en los salarios y un freno al ajuste sobre las espaldas de los sectores populares.

El conflicto del Neumático, de los y las docentes, de la Salud, etc., muestran cuál es el camino para lograr mejoras salariales. Para estos sectores, está claro que no hay nada que esperar de las patronales ni del gobierno, y tampoco de los burócratas de la CGT, ni de la CTA que conduce el diputado Hugo Yasky, quien tuvo la deplorable actitud de "visitar" al embajador yanqui Marc Stanley.

La solución viene por el lado de la lucha, y si se empuja desde las bases, bienvenida sea, vista la actitud claudicante y traidora de la mayoría de la cúpula sindical. Hay que tomar el ejemplo de las organizaciones piqueteras, que han estado en pie de lucha todo el año, reclamando contra el ajuste, por el aumento del monto de los planes sociales y que los mismos alcancen a todos y todas quienes no tienen trabajo registrado o están sin trabajo. En ese camino unitario es como se podrá derrotar el plan del FMI que está aplicando el ministro Sergio Massa, gran amigo de los EE.UU. y de los empresarios.

Es necesario también levantar un programa de reivindicaciones que sirva para convocar a las más amplias masas a la calle, única forma de derrotar el ajuste. Desde abajo, desde las asambleas obreras y también desde los territorios, es necesario masificar el reclamo de convocatoria a un PARO GENERAL y PLAN DE LUCHA, única forma de poder torcer el brazo del gobierno, el FMI y los empresarios.

Por un salario mínimo, vital y móvil igual a la Canasta Básica (140.000 pesos) y de los planes Potenciar Trabajo (70.000 pesos), que beneficie a todos y todas quienes lo necesiten. Aumento de jubilaciones y pensiones, también al monto de la CBT. Control efectivo de precios de los alimentos, con multas y/o expropiaciones de las empresas formadoras de precios; por una Empresa Nacional de Alimentos. Nacionalización del Comercio Exterior; de los puertos por donde sale la producción y del río Paraná. Reforma tributaria y financiera, nacionalización de la banca para que esté al servicio de la producción y no de la especulación. Estatización de las empresas energéticas y de servicios públicos (agua, telefonía), para acabar con los tarifazos.

Desde las Agrupaciones de Base Clasistas proponemos este programa para la discusión en los diferentes sectores que se encuentran luchando y movilizados. ¡Sólo el pueblo salvará al pueblo! proclamaba la CGT de los Argentinos del compañero Raymundo Ongaro.■

160.000 planes sociales son dados de baja

El gobierno volvió a arremeter contra las y los beneficiarixs de planes sociales, esta vez mediante la suspensión del programa Potenciar Trabajo a 154.441 personas, según informó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. De acuerdo con los datos informados por la funcionaria, esto significa que más del 10% de las personas que recibían este plan de 32.713 pesos dejaron de percibirlo en enero, cuando cobraron la mitad como paso previo a la baja del Plan.

La decisión del oficialismo continúa la línea anunciada por Sergio Massa al asumir el ministerio, cuando adelantó que se harían "auditorías" sobre los planes sociales, en un discurso en el que reiteró los prejuicios y las posiciones anti-trabajadores que difunden los grandes medios de comunicación y que han logrado instalar en una parte de la sociedad.

La embestida continuó con la denuncia perpetrada por el anterior ministro Juan Zabaleta contra numerosxs beneficiarixs, por supuestas "irregularidades". Para ello se valió de un informe de la AFIP sobre ingresos y gastos de las personas afectadas. Una lectura de los datos del informe mencionado revela la mirada de clase de los funcionarios, que consideran que no corresponde al Estado ayudar a quienes cobraron una jubilación o pensión (mínima), tuvieron ingresos o gastos por más de 2 salarios mínimos (monto que sigue muy por debajo de la línea de pobreza) o pagaron una suscripción de un servicio en dólares como Netflix. Para esta gente, sólo el más indigente amerita la percepción de un plan.

El nuevo recorte vino bajo la forma de una "validación" de datos personales. El gobierno dio plazo hasta el 13 de enero último para que lxs beneficiarixs ratificaran sus datos a través de la polifacética y cuestionada aplicación "Mi Argentina".

Más de 150.000 personas no pudieron completar la tarea. La Ministra, con un cinismo alarmante, culpó a lxs ex beneficiarixs -aduciendo que conocían la fecha límite desde dos meses antes- y a las propias organizaciones sociales, a las que responsabilizó de "no haber podido contactar" a los beneficiarios cuyas contraprestaciones controlan, sembrando sospechas sobre la Unidad Piquetera por no ayudar a "transparentar" la asignación de planes. En ningún momento se le ocurrió a la contadora platense que lxs interesadxs podrían no disponer de celulares adecuados, ni consideró que muchas veces resulta difícil validar la identidad en ese software (por cierto, muy cuestionado entre profesionales de informática y defensores de la privacidad como derecho humano). Tampoco pensó en aquellxs que deberían trasladarse hasta cientos de kilómetros para acercarse al "punto digital más cercano a su domicilio", como indican en la Web oficial.

Y ese celo formal contrasta con la tolerancia hacia las tremendas irregularidades que consolidaron la deuda externa que tanto quieren "honrar".

AL SERVICIO DEL FONDO

Los recortes en la cantidad de planes forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El organismo que encabeza Kristalina Georgieva publicó en diciembre último que se requería "mejorar la calidad y la focalización del gasto social" para cumplir con la baja del déficit primario prevista en los acuerdos firmados para pagar la monstruosa deuda tomada durante el gobierno de Macri. Esas "recomendaciones" del staff fondomonetarista significa que sólo deben mantenerse ayudas a algunas personas con necesidades más extremas, disminuyendo todo lo posible la cantidad de recursos que se les destine. Esto es algo que -como vimos más arriba- el gobierno impulsa de manera entusiasta.

El oficialismo apunta también a achicar los planes desenganchándolos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En el Consejo del Salario de diciembre último, los funcionarios adelantaron que tratarán de que los programas sociales deje de actualizarse de forma automática con el salario mencionado, posibilitando una mayor pérdida del poder adquisitivo de aquéllos.

RESISTENCIA PIQUETERA

Frente al ajuste en las ayudas para los sectores más postergados, hay luchas y silencios significativos.

Por un lado, la Unidad Piquetera (que conforman entre otras organizaciones el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán -Corriente Plurinacional-, Libres del Sur, diferentes MTR -histórico, Votamos Luchar, 12 de abril-, el MTL Rebelde y FOL), viene desarrollando un plan de lucha con movilizaciones, acampes y cortes de ruta, reclamando la anulación de las bajas y otras reivindicaciones del sector.

Por otra parte, las organizaciones sociales vinculadas al oficialista Frente de Todos mantienen un perfil bajo, con medidas puntuales de parte de algunas de ellas (como la CCC) mientras otras se manifiestan a favor del gobierno y de Tolosa Paz.

La pelea contra la suspensión y la baja de los planes forma parte de la lucha contra el ajuste dirigido por el Fondo Monetario y ejecutado por el gobierno de lxs Fernández y Massa. Va de la mano de los reclamos de trabajadores formales que ven licuados sus salarios, de lxs vecinos que enfrentan a los tarifazos y de quienes luchan contra la destrucción del medio ambiente. Es preciso unir esas luchas con una mirada amplia que tenga como objetivo la recuperación de los resortes fundamentales de la economía a manos del Estado nacional, para implementar políticas soberanas orientadas a las necesidades de las mayorías y al desarrollo independiente del país.

JORGE RAMÍREZ

Nuestra solidaridad con Belliboni frente a las amenazas del fascista Espert.

La Salud sigue en conflicto y el Gobierno reaviva las llamas

El reclamo iniciado por los trabajadores del sistema de Salud Provincial en noviembre pasado y que llevó a multitudinarias movilizaciones tanto en el interior como en nuestra capital, sigue en pie a pesar que el gobierno provincial se vio obligado a mejorar la pauta salarial que ya había firmada con los gremios oficialistas como el SEP (Sindicato de Empleados Públicos). El aumento fue insuficiente dado el grado de depreciación de los salarios de ese sector, pero también porque no alcanzó de igual forma a todos los empleados de esa repartición que se agrupan bajo dos leyes laborales provinciales diferentes (Leyes 7233 y 7625).

A pesar que el gobierno intenta demostrar que el conflicto fue saldado con la insuficiente mejora de la pauta salarial, a través de un adicional por recurso humano crítico para ambas leyes y blanqueo de sumas remunerativas y no remunerativas sólo para los trabajadores englobados en la ley 7625 y una fuerte campaña mediática, los hospitales y dependencias de Salud de Provincia organizados en la coordinadora Córdoba Salud Unida, iniciaron una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud. Querían llegar a un acuerdo salarial que conforme a los trabajadores y decidieron levantar los paros como muestra de buena voluntad manteniendo asambleas durante estos meses.

Si bien el reclamo principal es el salarial, también está el pase de los trabajadores englobados en la ley 7233 a la 7625, de personal de Salud de la provincia, mejores condiciones laborales y contratación de personal debido a la crítica situación en la que se encuentran muchos hospitales, sobre todo del interior.

En este marco de negociación y conflicto, los trabajadores se vieron sorprendidos este lunes con una serie de descuentos por jornada de protesta y por errores de carga de salarios que reavivó el descontento. A esto se agregó la noticia de la baja de contrato de una Médica Especialista del Hospital Elpidio Torres, delegada en la coordinadora Córdoba Salud Unida. La doctora fue impedida de forma muy violenta de ingresar a su puesto de trabajo, ya que tenía pacientes agendados, a través de personal policial y autoridades del nosocomio. Merece destacarse que este hecho de violencia y precarización ante una trabajadora del Estado provincial, se llevó a cabo en vísperas del Encuentro Suprarregional de Mujeres en Córdoba en el cual tuvo participación la misma ministra de Salud de la Provincia. Esto marca la doble vara con la que se maneja el Gobierno de Juan Schiaretti en cuestiones de género.

La falta de una mejora salarial justa, los descuentos salariales por jornada de protesta que incluyó días en que no se habían llevado adelante paros, las demoras en la unificación de las leyes que rigen a los trabajadores de la salud y la baja de contrato de la citada profesional, etc, provocó indignación de los trabajadores y las trabajadoras, que esta semana intensificaron las asambleas y medidas de protesta en Hospitales de Capital y el interior. El 15 de febrero se realizó un paro de 24 horas y jornada de protesta, y ya se ha delineado un plan de lucha para los semanas que siguen si no obtienen respuestas satisfactorias por parte del gobierno.

En un año electoral, los trabajadores de la Salud de Córdoba se han plantado ante el gobierno y exigen un cambio de rumbo en las políticas de vaciamiento y privatización del sector público en beneficio de los grandes monopolios privados. Exigen el reconocimiento que merecen y que se han ganado luego de su ardua labor durante la pandemia de COVID19, pero no sólo en palabras, sino en las condiciones de trabajo y retribución salarial. Pero además han sacudido a una anquilosada burocracia sindical que ya no los representa y se han organizado como colectivo evitando la intermediación y obligando al gobierno a reconocerlos y sentarlos en la mesa de discusión. Así se logró imponer nuevamente la bandera de una “recomposición salarial”, cuyo piso esté por encima de la Canasta Básica Total (al 17 de enero de 2023 el valor de la CBT tipo 2, según INDEC, es de $152.515).

Este reclamo de los trabajadores y trabajadoras de Córdoba no es aislado, sino que se encadena con otras luchas del sector, como las que semanas antes habían llevado adelante residentes y trabajadores de Salud de CABA, Mendoza, Salta y Neuquén. Marcan la necesidad de una reforma del sistema de Salud en nuestro país que permita un sistema público universal más integrado con las provincias y entre los sectores público y obras sociales que evite la privatización y el vaciamiento.

Esta necesidad de que la salud no se trasforme en una mercancía, a la que sólo algunos sectores puedan acceder también está generando reacciones de trabajadores del sector de la salud y de la comunidad en el mundo. Reclaman a sus gobiernos mejores condiciones laborales y mejores servicios, como sucedió con las multitudinarias manifestaciones días atrás en el Reino Unido y España.

PABLO AGUIRRE
Médico, Delegado de Hospital Misericordia, Córdoba

LIBERACIÓN es el órgano de prensa del PARTIDO DE LA LIBERACION (PL) de Argentina.

Se sostiene con el esfuerzo de militantes, simpatizantes y lectores. Difundir LIBERACION es ponerle el hombro a la lucha de la clase obrera y el pueblo, por la liberación nacional y social, la revolución y el socialismo.

El PL es un partido marxista-leninista, revolucionario e internacionalista. Director: Sergio Ortiz. Cartas a: Copina 3019 (CP 5000) Córdoba.

E-mail: plarg.prensa@gmail.com Sitio en Internet: www.partidodelaliberacion.com.ar

Entregan el agua de cinco provincias a Israel

Cinco provincias argentinas ya firmaron que entregarán el manejo de su agua potable a una empresa de Israel. Se trata de Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. El gobierno nacional motorizó fuertemente tal negocio y entrega del país, con la gira por Israel que Wado de Pedro y el entonces ministro Julián Domínguez, con media docena de gobernadores, hicieron en abril de 2022.

Sobre esa base, en febrero de este año, Wado de Pedro y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto con varios gobernadores, firmaron los documentos con el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. En el acto también estuvieron presentes los gobernadores de Santa Fe y Santiago del Estero, que son las provincias que van a sumarse a esta vergonzosa entrega. Las pioneras fueron San Juan y Mendoza, que firmaron en septiembre de 2022.

Los motivos esgrimidos por amplios sectores del oficialismo, como así también por el sector empresarial fueron los siguientes: a) las credenciales de la empresa mencionada (siendo la proveedora 80% del agua potable en Israel). b) una supuesta búsqueda de efectividad en la gestión del recurso y presupuestos. Sin embargo, la llegada de capital extranjero o de patentes (y similares), debe apreciarse en el contexto político, económico y social que transita nuestro país y el régimen sionista de Israel. Argentina se encuentra jaqueada por una crisis económica y social cada vez más difícil de timonear, para la cual el estado nacional busca hacer "buena letra" permitiendo la inversión/participación de una empresa proveniente de las amistades de la Casa Blanca y por ende también actuando de manera complaciente para con el FMI.

Por el otro lado tenemos a Israel, quien se encuentra en un proceso "neocolonialista" y de conquista constante y genocidio en perjuicio del estado palestino. Además, tiene un posicionamiento constante para garantizar su influencia y capacidad militar contra estados como Siria, Irán e Iraq. Para lavar su cara, pero también para expandir sus negocios, esfera de influencia y exportar capital (cual buen estado aspirante a imperialista, por lo menos regional) intenta establecer negocios fuera de sus cuestionables fronteras recibiendo así más que una aceptación explícita de su existencia como estado.

Se insiste en que el proyecto tiene como fin principal una estructuración y ejecución del servicio de provisión de agua potable mucho más eficiente. Sin embargo, no debemos pasar por alto el carácter vital y estratégico de un recurso como el agua y mucho más en un contexto donde su valor es cada vez más alto. La creación de una estructura hídrica ingresa dentro del importante plan de infraestructura de la nación (por más que sean de carácter provincial), por lo cual que se conozcan las obras y sean guiados por capitales extranjeros podría llevar a una situación de espionaje disfrazado de simple cooperación comercial internacional. No debemos ignorar que Israel en su carácter de estado reconocido por EEUU y como uno de sus principales vasallos, podría hacer una suerte de trabajo de informante para la gran potencia imperialista en su lucha por el dominio de la región, en el marco de la guerra comercial que tiene con China y la confrontación bélica indirecta con Rusia.

Una de las características principales del imperialismo, como señaló Lenin, era la exportación de capital como una necesidad para la supervivencia del imperio, que comienza a tener sus primeras contradicciones económicas por no poder generar las ganancias necesarias para el sostenimiento de su maquinaria, lo cual explicaría la expansión de las operaciones de Mekorot. Esto se acompaña con las guerras imperialistas de rapiña y conquista, una constante en las planificaciones del conjunto de dirigentes sionistas, sobre las cuales el estado argentino no realiza las denuncias correspondientes en defensa del estado palestino quien es víctima del juego entre imperios.

Denunciamos que nuestros recursos son codiciados por las empresas extranjeras y también hacemos un llamamiento a la coherencia. Nuestra población se encuentra sumergida en un estado de "confusión" sobre quiénes son los estados que deberíamos defender y alianzas que debemos entablar. Argentina conducida por partidos reformistas o reaccionarios, con la complicidad de medios de comunicaciones que responden a ellos, alimentan la tendencia a creer que todo lo proveniente de EEUU o UE es el camino hacia la salvación. A muchos les cuesta hablar de la cuestión palestina, los gobiernos antiimperialistas y las luchas populares.

LULO MALESSORI

"Las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también"

La soberanía de un Estado sobre su territorio se refiere a la autoridad que el gobierno nacional ejerce dentro de los límites del mismo y también a que las leyes que allí se dicten sean válidas para todos los habitantes de ese país. El Estado nacional ejerce su autoridad y el control de manera exclusiva sobre los espacios terrestre, marítimo y aéreo que conforman el país. La Soberanía Nacional es la capacidad que tiene un país de tomar decisiones en forma autónoma e independiente sin ninguna intervención e injerencia de un poder extranjero, sobre sus recursos naturales y económicos.

Los recientes sucesos en Lago Escondido, ponen de manifiesto que el Estado argentino, no resguarda ni garantiza nuestra soberanía.

Dirigentes políticos, militantes sociales y de Derechos Humanos iniciaron el 30 de enero la séptima Marcha Soberana a Lago Escondido organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), para poner de manifiesto que Lago Escondido es patrimonio de todos los argentinos y argentinas. Reclamaron además que se abra un camino público al lago como lo establece nuestra Constitución y el Código Civil, que dispone que todas las aguas, riberas y playas y sus accesos en toda su extensión son bienes públicos. Es decir, patrimonio inalienable, inembargable e imprescriptible de todos los ciudadanos.

El contingente fue interceptado, hostigado y privado de su libertad por varias horas por 50 hombres a caballo y armados que responden a las órdenes de Joe Lewis, ante la pasividad de los policías de Río Negro que estaban en el lugar. Varios integrantes de la Marcha resultaron lesionados y no pudieron ingresar al camino de Tacuifí, a pesar de que ya han pasado más de 15 años de la resolución judicial que declaró ese sendero como camino público.

En 1996, el magnate británico Lewis, en condiciones dudosas, adquirió las 8 mil hectáreas que rodean al Lago Escondido. Lo hizo a través de una firma argentina que luego de la compra, le cedió la propiedad. Desde ese momento, el derecho al acceso público que garantiza la ley, es impedido por la seguridad armada del empresario.

Actualmente el terreno tiene 12 mil hectáreas, dentro del cual se encuentra su mansión de 2500 metros cuadrados (frecuentada por el ex presidente Mauricio Macri y algunos jueces y funcionarios corruptos) y un aeropuerto con una pista de 2 mil metros que no tiene radares, por lo que sus movimientos no pueden ser controlados. Recordamos que esa propiedad está en una zona de frontera y desde 2010 se ha denunciado que desde allí parten vuelos a las Islas Malvinas. La Fuerza Aérea argentina autorizó su funcionamiento y ni el gobierno nacional ni el de Río Negro han investigado y menos aún decidido el cese de esas actividades ilegales, que atentan contra la soberanía del país y lo ponen en riesgo.

La soberanía no se ejerce con discursos ni festejos el 20 de noviembre, sino con acciones concretas. Expropiar las tierras usurpadas por Lewis, respetar los territorios ancestrales de las comunidades mapuches, estigmatizados como terroristas y reprimidos cuando los defienden.

Las marchas a Lago Escondido expresan la convicción de los argentinos y argentinas que sostenemos que "Las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también". Y deben continuar, rodeadas de solidaridad popular y realizarse con las previsiones de autodefensa que la situación requiera, para que no nos puedan seguir patoteando impunemente.

ELENA RIVERO

LIBERACIÓN EDICIÓN DIGITAL

Ataques de los antiderechos contra el feminismo

El crimen del niño pampeano Lucio horrorizó a una sociedad que muchas veces permanece indiferente ante el maltrato o abuso de las niñeces. En este caso, quienes lo asesinaron fueron su madre y su pareja, lo que provocó un doble ensañamiento contra ellas: eran mujeres y lesbianas.

El caso provocó reacciones que llegaron al clamor de venganza más que a un legítimo reclamo de justicia. Las autoras fueron condenadas por el Poder Judicial, en un plazo razonable, y el delito que se les atribuyó tiene la máxima pena que reconoce nuestro Código Penal: prisión perpetua.

El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa condenó a Magdalena Espósito Valente y Abigail Páez por "homicidio calificado", agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía en el primer caso; y para Páez, ensañamiento y alevosía y en concurso con abuso sexual, también agravado. Correctamente, los jueces rechazaron el "odio de género" que había solicitado la familia de Lucio.

GÉNERO Y EDAD

"La Violencia no tiene Género" tituló La Nación su editorial del 27/1. Luego tuvo que recular por haber puesto en boca de la titular del CELS, Paula Litvachky, una supuesta defensa de las asesinas de Lucio,que no había hecho. Ese diario de la oligarquía argentina tenía el objetivo de negar una realidad incontrastable: la violencia machista, que no asesina solo mujeres y disidencias, sino también las infancias.

Las estadísticas muestran alarmantes números de violencia contra las niñeces, que sufren maltrato en el ámbito familiar, hasta llegar a la muerte, en ocasiones relacionados con femicidios, los crímenes de odio hacia las mujeres y diversidades. Se les llama "homicidios vinculados" por ser cometidos junto al asesinato de sus madres o para causarles dolor a éstas. En la última década, 120 niños y niñas fueron víctimas de estos homicidios.

Según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 30% de las denuncias son casos de violencia familiar cometida contra niños, niñas y adolescentes; en el 80% de los casos los victimarios son los progenitores, de los cuales el 75% son varones.

CONTRA EL FEMINISMO

Los sectores antiderechos han usado el horrible crimen de Lucio para atacar nuevamente al feminismo, por tratarse sus victimarias de mujeres y lesbianas.

"¿Dónde están las feministas?" replicaban en las redes sociales, ignorando o mintiendo sobre la verdadera lucha del movimiento de mujeres y disidencias. Este colectivo es el que ha puesto en la calle, desde hace muchos años, la problemática de la violencia familiar, no sólo de género, sino también contra las infancias.

Periodistas feministas y editoras de género fueron escrachadas por haber supuestamente "defendido" a las asesinas. Nada de eso ocurrió. Esas comunicadoras enfocaban el caso desde una perspectiva que abordara la problemática de la violencia infantil, para combatirla y erradicarla, en vez de difundir el griterío histérico de la venganza. No se prendieron al discurso odiante de los medios hegemónicos y la prensa sensacionalista.

Esos mismos sectores que se autotitulan "provida", son los mismos que rechazan la plena aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, con la consigna "ConMisHijosNoTeMetás". Y está demostrado que la ESI es una herramienta eficaz para el abordaje de la violencia hacia las infancias porque crea un ámbito favorable para que cuenten lo que les pasa, y así detectar posibles maltrato y abusos.

La formación de los y las docentes en la ESI es muy necesaria, ya que los signos de maltrato que evidenciaba Lucio debieron ser detectados en el jardín al que concurría. Pero para ello, los y las docentes deben contar con la debida protección de las autoridades educativas al activarse los protocolos para casos de violencia. Es que en el contexto actual de violencia que se vive en las escuelas, hay temor de denunciar por la posibilidad de agresiones de las familias de las infancias involucradas.

Lo mismo con el sistema de salud, ya que Lucio había registrado cinco ingresos en diferentes hospitales de Santa Rosa, pero ningún profesional denunció que las lesiones que presentaba el niño podían ser evidencia de maltrato familiar.

Lucio, el niño asesinado.

JUSTICIA

Las culpables del crimen de Lucio fueron condenadas, el Poder Judicial actuó con bastante rapidez, lo que no suele ocurrir en temas de violencia de género. El sufrimiento y posterior asesinato de Lucio no ha quedado impune, y eso es mucho decir en Argentina, con una larga historia de impunidades en crímenes aberrantes, sea de personas adultas, mujeres, varones, disidencias, jóvenes y niñeces.

Las Madres de Plaza de Mayo reclamaron durante 30 años por sus hijos e hijas desaparecidos, y por la restitución de sus nietos y nietas apropiados, 400 de los cuales, hoy adultos/as, todavía permanecen sin conocer su identidad. A más de cuatro décadas del golpe de Estado, más de mil genocidas fueron condenados por esos delitos, de lesa humanidad. Sin embargo, la mayoría, condenados a reclusión perpetua, están en cómodas prisiones domiciliarias.

Las asesinas de Lucio están en la cárcel y estarán allí por largos años, al igual que los rugbiers que mataron al joven Fernando Báez Sosa.

Sin embargo, ni la violencia infantil ni los crímenes contra las infancias ni la violencia entre los jóvenes, se erradicarán únicamente con la cárcel, por muy duras que sean las penas. El Estado es responsable de la implementación de políticas públicas para evitar esas situaciones, mediante protocolos que detecten la violencia infantil, mediante campañas de prevención y defensa de los derechos de la niñez.

Se necesita una sociedad que se involucre de verdad, sin odios ni estigmatizaciones, para evitar situaciones de maltrato, abusos y violencia, y se termine con los discursos odiantes y vengativos.

Esa sociedad no es el capitalismo, desigual y violento, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. Necesitamos una sociedad más igualitaria, con educación, cultura y valores humanos, donde ni el hombre (ni la mujer) sean sus propios lobos, con perdón de estos animales.

IRINA SANTESTEBAN

Hacia la marcha y actos del 24 de marzo, sin electoralismo

El 24 de marzo se cumplirán 47 años del golpe militar-cívico que en 1976 produjo el baño de sangre con el terrorismo de Estado, con 30.000 desaparecidos militantes populares, y que al mismo tiempo entregó las riquezas del país al imperialismo y los monopolios con el plan de Martínez de Hoz y quienes lo sucedieron.

Los métodos represivos del general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti, y sus oficiales y suboficiales represores, habían sido aprendidos de sus "maestros" franceses de la represión en Argelia y de los norteamericanos de las Escuelas de las Américas y West Point. Como los criminales argentinos fueron discípulos muy "creativos", fueron llamados por el imperio para dar clase a regímenes represivos en Centroamérica.

Es difícil precisar cuál de los métodos de la dictadura fue el más cruel. Hubo secuestros y torturas hasta la muerte, vuelos de la muerte con la promesa de llevar los prisioneros a otras cárceles, violaciones de mujeres y hombres, robos de centenares de niños que fueron apropiados, largas detenciones sin proceso en cárceles, fusilamientos disfrazados de intentos de fuga, infiltración en los organismos de derechos humanos para secuestrar y matar, difamación de las organizaciones populares como "terroristas", robo de dinero, propiedades y empresas de los secuestrados para quedárselas como botín, operaciones de prensa para desacreditar gente, etc.

Lo importante es que esos criminales perdieron la batalla política frente al pueblo. Por ejemplo, el genocida general Luciano B. Menéndez falleció en 2018 ostentando el récord de 14 cadenas perpetuas. El dictador Videla falleció en 2013 en la cárcel de Marcos Paz, sentado en el inodoro. Así de tristes fueron sus despedidas...

Esas pulseadas las ganó el pueblo, comenzando por las primeras marchas en abril de 1977 de las Madres de Plaza de Mayo y luego ganando en masividad y contundencia en años de democracia. Esa movilización fue la que determinó que acá hubiera juicios y condenas, y las cosas no quedaran simplemente en el juicio a los ex comandantes de 1985 y el informe Nunca Más.

Los organismos de DD HH y sus pañuelos blancos fueron la vanguardia de esa lucha, junto con los movimientos populares y sectores revolucionarios que continuaron la lucha de la Generación del '70, entre otros nuestro PL.

Nobleza obliga, si bien no fue lo fundamental, resultó muy necesario y valioso el aporte del kirchnerismo desde su llegada al gobierno en 2003, por su apoyo a los organismos, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, etc.

Hubo muchos juicios, y sigue habiéndolos, contra los represores de uniforme militar y policial, con más de mil condenados, pero en cambio se cuentan con los dedos de las dos manos los responsables civiles, empresarios y políticos. Estos fueron la pata sostén de la dictadura y los que aprovecharon para ensanchar sus negocios y ganancias. Videla murió en Marcos Paz, pero Martínez de Hoz, presidente de Acindar y súper ministro de Economía, murió impune. Y el dueño del ingenio Ledesma, Carlos P. Blaquier, sigue sin ser juzgado pese a los procesos por desapariciones de obreros en Jujuy en julio de 1976 durante "el Apagón". Y como él, no pagaron sus crímenes los ejecutivos que entregaron a los militares, los nombres y domicilios de delegados y activistas de sus fábricas, a los que quisieron sacarse de encima, como sucedió en Renault, Fiat, Mercedes Benz, Perkins, Ford, Propulsora, Acindar, etc. Esto es lo que hay que completar, para poder decir que hicimos los deberes de los Derechos Humanos en forma total, para cumplir con los 30.000 compañeros y compañeras.

A 47 años del golpe hay otra cosa inconclusa, que compromete a la democracia: las FFAA, policiales y de Seguridad no son democráticas ni mucho menos populares. Siguen con ejercicios con el Comando Sur yanqui, con cursos en la Escuela de las Américas, los operativos Unitas y ahora refuerzan los vínculos militares y de seguridad con el sionismo de Israel. Eso sí, nunca un curso con militares cubanos, venezolanos o nicaragüenses.

Hoy la derecha reaccionaria pretende volver con la teoría de "los dos demonios", para acusar de terroristas a nuestros desaparecidos. En esa onda están Bullrich, Milei, Espert y otros. Como dijo Macri en su tiempo, es "el curro de los derechos humanos", para denigrar esta causa. Reiteramos: hubo un sólo demonio, la dictadura, antes la Triple A, el imperialismo y los más de 500 centros clandestinos de tortura y desaparición.

Al conmemorarse el 24 de marzo, el PL considera que la mayor violación actual a los DDHH es el ajuste llevado a cabo por el cogobierno del Frente de Todos y el FMI. Vivir, comer, trabajar, educarse, curarse, jubilarse, tener un techo dónde vivir, etc, son derechos humanos que hoy no se respetan.

Y a eso se suma la existencia de presos políticos como Milagro Sala, las cuatro hermanas mapuche detenidas en Río Negro, Facundo Jones Huala y otros presos políticos para quienes reclamamos libertad vía indulto presidencial.

El PL buscará participar este 24 de marzo, como cada año, de la marcha y acto que mejor represente estos ideales y consignas planteadas. Lo haremos con fuerzas aliadas. Alertamos contra un eventual intento de un sector del gobierno, de aceitado vínculo con los organismos, que pueden meter el "operativo clamor" de CFK presidenta 2023 en el acto de ese día. No estamos de acuerdo con ese tipo de jugadas partidistas y electoralistas que desnaturalizarían la jornada del 24 de marzo. Esta fue siempre por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, para condenar al terrorismo de Estado y reivindicar a los 30.000 compañeros y los organismos de derechos humanos. Los actos electorales, cualesquiera sean, son legítimos, pero en sus respectivos ámbitos, sin dividirnos en cosas tan importantes que nos unen y tienen que ver con la historia, el presente y el futuro. Las candidaturas presidenciales van y vienen. La causa de los 30.000 está siempre ahí y en especial los 24 de marzo.

Comité Central del Partido de la Liberación (PL). 16 de febrero de 2023

Milagro Sala,
abandonada por el gobierno y afrontando la muerte de un hijo

El hijo de Milagro Sala, Sergio Chorolque Sala, falleció el lunes 23 de enero, con 37 años de edad. Fue encontrado sin vida en su casa, vecina a la de su madre. Los restos de Sergio fueron velados en la casa donde Milagro cumple su condena y luego inhumados en Alto Comedero. Camino al cementerio, a despedir a su hijo, Milagro fue escoltada por personal policial y no le permitieron ser acompañada por su familia ni siquiera en ese momento.

El gobierno de Gerardo Morales montó un mega operativo durante el sepelio, que fue reforzado al salir el cortejo fúnebre. Incluyó más de 30 efectivos de a pie, además de otro número importante en vehículos. El cortejo, de 10 kilómetros por la ruta nacional 9, fue vigilado por varias motocicletas cada una con dos efectivos armados con Itakas, tres camionetas policiales sin patente, tres móviles policiales, una Trafic y un automóvil del Servicio Penitenciario de Jujuy. Y al llegar al cementerio había un vallado de efectivos policiales, según informaron medios locales. Ese maltrato fue repudiado por los Organismos de DDHH.

El encierro de Milagro ha sido cruel y lleno de irregularidades. Recién en diciembre del 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que la condenó en 2019 a 13 años de prisión. Desde su detención en enero de 2016, los organismos de DDHH vienen denunciado y luchando por su libertad. Incluso distintos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidieron informes al Estado argentino sobre su salud y situación legal.

El fallo quedó firme luego que la Corte Suprema declarara inadmisible un recurso de la defensa y decidiera no analizar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus defensores.

Entretanto, el gobierno nacional no ha movido ni un solo dedo para ayudar a mejorar las condiciones de Milagro, ni detener el hostigamiento constante que sufre por parte del gobierno provincial, ni muchísimo menos para liberarla. El presidente Alberto Fernández argumentó que la condena fue dictada por la Justicia de Jujuy y no la federal, con lo que un indulto solo le correspondería al gobernador, Morales, quien incluso publicó una carta festejando la decisión de la Corte. Una muestra más de su desprecio y ensañamiento por Sala. Una carta de 1.500 feministas reclamaron a Fernández que indultara a Milagro, pero el presidente sigue negándose. De allí que en algunos reportajes la detenida dijo que se sentía abandonada o traicionada por Fernández.

El Partido de la Liberación, que forma parte del Foro por la Liberación de lxs Presxs Políticxs, repudia la actitud de Morales, el principal oponente político de Sala y actual carcelero. Pero también denuncia la inacción del gobierno del FDT y el abandono que hizo el gobierno nacional de esta lideresa social y política, mujer y originaria.

NANCY GÓMEZ

Fernández, un Judas.

PL EN LOS MEDIOS Y REDES

En Resumen Latinoamericano del 28/1/2023 se cronicó la protesta en Salta contra el golpe de Estado en Perú: *"Para cerrar la manifestación, residentes, organismos de derechos humanos y organizaciones, decidieron cortar la calle frente al Consulado. Los manifestantes hicieron una ronda para escuchar a quienes tomaran la palabra. Con megáfono en mano, la primera en hablar fue Elena Rivero, de la Asociación de DDHH Coca Gallardo. "En Perú, las organizaciones están denunciando torturas entre los detenidos. Por eso estamos aquí los organismos de derechos humanos, porque apoyamos al pueblo peruano", explicó. "Es urgente que seamos más para expresar masivamente nuestra solidaridad con nuestros hermanos. Lo que les está pasando a ellos nos puede pasar a nosotros".*

Nuestra camarada Elena fue entrevistada por Canal 2 de televisión en tanto dirigente de la "Coca Gallardo" y Mesa de Trabajo, fundamentando el repudio al decreto del gobernador Sáenz de ilegalizar las protestas sociales con el argumento de que es delito cortar las calles.

En Córdoba también estuvo el PL el 27/1 en la protesta de peruanos y argentinos solidarios, frente al monumento de Agustín Tosco. Y volvió a estar el 9 de febrero con pancarta de Víctor Hugo Paciaroni, junto con compañeros del Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH en el acto de la comunidad peruana de esta provincia. El camarada Sergio habló por el PL en dicho acto realzando la solidaridad argentina con Perú y denunciando el rol criminal del imperialismo yanqui en ese golpe de Estado y feroz represión que aún perdura.

Su nota "El Prontuario de Sergio Massa" se subió a su blog y también se publicó en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/01/06/argentina-el-prontuario-de-ergio-massa/ y en https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=11167

Otra nota suya, a 34 años del copamiento del cuartel de La Tablada, fue publicada en el medio digital de España, El Mercurio: https://www.elmercuriodigital.net/2023/01/a-34-anos-del-copamiento-del-cuartel-de.html

La secretaria general del PL, Irina Santesteban, firmó la adhesión al documento de solidaridad con el pueblo Saharauí, que nos hizo llegar el Representante del Frente Polisario en Argentina. La declaración de PLACSO (Plataforma Latinoamericana y Caribeña en Solidaridad con el Pueblo Saharauí) condena al reaccionario régimen de Marruecos y defiende los derechos del pueblo Saharauí y el Frente Polisario.

El embajador de Nicaragua en Argentina, Carlos Midence, invitó a una delegación del PL a hacerse presente el 23 de febrero en sede de ATE, en el acto con motivo del 89 aniversario del asesinato del general de hombres libres, Augusto César Sandino.

SECRETARÍA DE PRENSA

Hay muchas huelgas y protestas en Francia y el Reino Unido

Un dato saliente y muy interesante desde la óptica del marxismo-leninismo, es la aparición de fuertes movimientos huelguísticos en la clase trabajadora de países europeos, capitalistas e imperialistas socios de Estados Unidos. Ese proceso es más definido en Francia y el Reino Unido.

Una de las consecuencias de este proceso, que venía de antes y se aceleró en el año 2022, fue la caída de algunos gobiernos como ocurrió en Londres con Boris Johnson y su sucesora Liz Truss. Ésta apenas alcanzó a gobernar 45 días y fue reemplazada por el actual primer ministro, el millonario Rishi Sunak.

Sin cambiar tanto de nombres, el gobierno francés también vive tremendas sacudidas que no le auguran gran futuro a Emanuel Macron, jaqueado por una ola de paros y movilizaciones contrarias a su proyecto de modificar el sistema jubilatorio. ¡En Francia también quieren aumentar de 62 a 64 años la edad para acogerse al retiro!

Ese objetivo -que parece común a todos los gobiernos capitalistas del mundo, siguiendo los patrones del FMI – figura en el artículo 7 del proyecto del gobierno francés, que está tratando la Asamblea Nacional. El 17 de febrero debería pasar al Senado, que a su vez tiene tiempo hasta el 26 de marzo para convertirlo en ley. Caso contrario Macron y su primera ministra Elisabeth Borne podrían sacarla por decreto u ordenanza.

El problema que tienen no es sólo de número de legisladores, pues necesitan 289 votos a favor para que la iniciativa pase a la Cámara Alta, y el oficialismo y la derecha de Republicanos no llegan a ese número. El problema principal es que se trata del segundo intento de reforma previsional de Macron, que debió retirar su iniciativa en 2020 luego de chocar de frente contra el repudio popular masivo.

Y ahora le volvió a ocurrir lo mismo. O más aún, porque los gremios y confederaciones de trabajadores se unieron para oponerse al ajuste y armaron un frente de 8 grandes sindicatos. Y han movilizado a más de 2 millones de personas sobre todo en dos de las cinco oportunidades pues se marchó el 10, 19 y 31 de enero, y el 7 y el 11 de febrero. En París y más de 200 ciudades hubo protestas, extendiéndose la marea en forma más amplia que en el año 2020.

En este caso se nota que la causa del descontento y la crisis es un plan de ajuste contra los trabajadores y el pueblo, apuntando a los jubilados. Si bien en las cuentas del estado francés debe pesar los efectos negativos del alza de precios de la energía producidos por la guerra de la OTAN en Ucrania, no puede la gran burguesía gala y la derecha de ese país echarle la culpa a Putin y a Rusia. Ese argumento imperialista puede tener más cabida en Alemania, país industrializado que está sufriendo por haberse alineado tan fuerte con Washington y las sanciones contra Moscú, viendo interrumpida la provisión del gas ruso (no por decisión del presidente ruso sino por el acople del canciller alemán Olaf Scholz a la guerra y los ataques de la marina yanqui el 26 de septiembre de 2022 contra dos gasoductos rusos de exportación a Europa: Nord Stream y Nord Stream 2).

En el Reino Unido también afloró la lucha obrera y popular, muy acicateada por una inflación que superó el 10,5 por ciento y el nivel de vida afectado por las tarifas y el costo de vida, cuando los salarios van por detrás del aumento de precios. Eso es algo que los latinoamericanos sufrimos en carne propia, con inflaciones en Argentina de entre el 53 y el 93.8 por ciento en los últimos dos gobiernos. Los británicos lo están padeciendo ahora con el 10,5.

En disconformidad, el 1 y el 6 de febrero se han declarado paros en muchos sectores sobre todo el de la salud, con las enfermeras a la cabeza, y también los ferroviarios, la educación, etc. “Las huelgas durante los próximos dos días serán las de mayor intensidad en nuestra historia: se llevarán a cabo en 73 instituciones del NHS en Inglaterra, en comparación con 44 en diciembre y 55 en enero. Los miembros de otros sindicatos de la salud también están en huelga, lo que hace que hoy sea el día de huelga más grande en el NHS (Sistema Público de Salud)", informó el sindicato de enfermeras.

Según el Colegio Real de Enfermería, el salario de esas trabajadoras cayó un 20 por ciento desde 2010 y eso ahora es inaguantable con el aumento del costo de la vida, alimentos, combustibles y tarifas. Y con el gobierno conservador de Sunak negándose a concederle esos aumentos que piden y reclaman esas compañeras en las calles.

¡Y pensar que en su tiempo la dictadora Margaret Thatcher logró imponer entre los 80 y 90 el modelo neoliberal y antiobrero, con cierre de minas y privatizaciones, con el argumento de “There is not Alternative”-TINA (No hay alternativa)! Claro que siempre hay alternativa al capitalismo brutal. Hoy los trabajadores del Reino Unido deberán buscarla un vez más.

DIEGO ZAPATA

El capitalismo hace agua.

LIBERACIÓN EDICIÓN DIGITAL

Siguen las agresiones de EE UU contra Beijing

El primer fin semana de febrero pasado el secretario de Estado Antony Blinken debía aterrizar en Beijing para una importante visita de Estado que había estado preparándose, como sucede en estos casos, con bastante antelación.

Pero el funcionario yanqui nunca viajó a China, pues el sábado 4 un avión militar de USA derribó con un misil y sin previo aviso un globo aerostático del país socialista que había pasado por su territorio. El derribo ocurrió sobre el mar, a la altura de Carolina del Sur.

De inmediato casi todas las cadenas mediáticas mundiales empezaron a machacar con la noticia del "globo espía de China", obviamente sin la menor prueba de lo que decían ya que la propia fuente de la noticia, la administración Biden y las FFAA de Estados Unidos, no pudieron suministrar ningún elemento que acreditara esa historia.

No se crea que sólo las agencias más proyanquis como AP o cadenas como la de Clarín le dieron manija a esa cobertura. Incluso las "progresistas" como C5N, de orientación kirchnerista, también navegaron en esas aguas turbias.

China dijo que no se trataba de ningún operativo espía. "La aeronave civil china que entró en el espacio aéreo de Estados Unidos lo hizo por error, pero Washington reaccionó de forma exagerada, usando este asunto como excusa para sancionar ilegalmente a empresas e instituciones chinas", afirmó la cancillería china.

"China se opone firmemente y tomará represalias contra aquellas entidades estadounidenses que dañen nuestra soberanía y seguridad", dijo ese ministerio, refiriéndose a las sanciones que anunció el departamento de Comercio estadounidense contra seis empresas aeroespaciales chinas.

Agregaron los chinos: "desde mayo del año pasado, al menos diez globos estadounidenses sobrevolaron el espacio aéreo chino, y esto incluye a las regiones de Xinjiang, del Tíbet y otros lugares. China ha explicado que su aparato civil entró por error en su espacio aéreo, pero ellos no han explicado por qué sus globos entraron en el nuestro sin tener aprobación".

Acá intervienen o deben intervenir las pruebas concretas, y también la política nos debe orientar en el sentido de a cuál de las dos partes se le puede creer y a cuál no, por sus antecedentes internacionales.

China dice que el globo estudiaba el clima. Y los yanquis que lo derribaron lo acusan de espionaje; pues en este caso deben presentar las pruebas. No lo hicieron ni antes del derribo ni después, pese a que su marina de guerra recogió parte de los restos y ahora alegan que están buscando el resto bajo el mar. Hasta ahora no han podido presentar ningún elemento que compruebe su grave acusación de espionaje.

Y si ahora tienen alguna dificultad para encontrar los restos en el mar, esa es su culpa, pues Joe Biden sólo autorizó el derribo cuando el globo había pasado. Si lo hubieran bajado antes habría caído en territorio firme y podrían haber juntado la información que ahora no pueden brindar o no quieren.

Por otro lado, sin dar detalles, EE UU se queja de que el globo pasó por lugares donde tienen armas nucleares, depósitos y arsenales. O sea que están con la cola sucia. Le echan la culpa al cartero, en este caso al globo, de que tienen misiles por todo el país y también en el extranjero.

A las autoridades estadounidenses no les molesta tanto que se sepa que en el mundo tienen alrededor de 800 bases militares y 200 mil soldados, hoy una buena parte girando alrededor de apoyar a la OTAN en su guerra de Ucrania contra Rusia. Ellos pueden hacer esa guerra y todas las que se le ocurra, pero nadie tiene derecho a relevar los dispositivos militares norteamericanos en su propia casa, que es el "delito" que ellos imputan al globo civil chino.

Otro aspecto que surgió del incidente: después de derribar el "globo espía", el gobierno norteamericano pidió una conversación telefónica de su secretario de Defensa, Lloyd Austin, con su par chino, y éste no aceptó la comunicación. La runfla mediática presentó el gesto como agresividad china. Fue cinismo yanqui, que primero te agrede militarmente y después quiere hacerte un llamadito "para la tribuna". Muy bien los chinos en esto.

La maniobra de Biden apunta a hacer la guerra a China y poner de su parte a gobiernos latinoamericanos, para saquearlos mejor. Por eso denunció que además del "globo espía" que había derribado habían habido otros artefactos chinos girando sobre los cielos latinoamericanos, aunque no pudo afirmar que hayan sido espías, pero dejando caer la sospecha sobre uno que sobrevoló Colombia.

EE UU quiere meter una cuña y dividir a los países de nuestra América, nucleados en la CELAC, y el país socialista asiático. Ese no es ningún secreto. Ya lo había dicho la generala Laura Richardson en sus lamentables declaraciones durante su gira por Argentina en abril del año pasado: "Entrevista a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos: "Me preocupa la estación espacial de China en la provincia de Neuquén". Al cierre de su primera visita a la Argentina, la general Laura Richardson advirtió sobre las acciones de China y Rusia a lo largo de la región. Además, luego de su reunión con Cristina Kirchner, destacó: "La vicepresidenta muestra una gran pasión por su país" (Infobae, Reportaje de Juan Ignacio Cánepa).

La generala Richardson hizo nuevas declaraciones el 24 de enero pasado, destacando su interés por el triángulo del litio, de Argentina, Bolivia y Chile. "El 60 por ciento del litio del mundo se encuentra en ese triángulo y ese elemento es necesario hoy en día para la tecnología".

Los que quieran seguir besando las botas yanquis de Biden y la citada generala, más las del Comando Sur y el Comando Norte, que lo hagan. Nosotros somos antiimperialistas, estamos del lado de China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Bolivia, etc, apoyamos a Rusia contra la OTAN y los ucronazis de Zelensky, y defendemos nuestra soberanía y recursos como el litio.

SERGIO ORTIZ

¡Viva la rebelión popular en Perú!

El 7 de diciembre del 2022, el presidente de Perú, Pedro Castillo, elegido democráticamente en 2021, anunció que iba a ordenar el cierre del Congreso. La medida fracasó y fue destituido. El Congreso votó su destitución y nombró a la vicepresidenta, Dina Boluarte como su sucesora. Desde los años '80, Perú vive ciclos de inestabilidad política y económica. Hiperinflación, recesión, y políticas neoliberales que tuvieron su máxima expresión durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) que llevó adelante una política de desguace del Estado, anti obrera y anti popular. Sus ideas fueron plasmadas en la Constitución aprobada en 1993, que sigue vigente.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en el segundo trimestre de 2022, el 38,3% de la población del país no llegaba a cubrir la canasta básica alimentaria, a pesar de que el PBI real creció entre enero y setiembre de ese año, un 2,9 %. Y en algunos distritos del departamento de Cusco, casi 97,8% de la población, es pobre. Ese sector de la población peruana, principalmente de la zona andina, es el que le dio el triunfo a Castillo, aunque con un escaso margen. La oposición, expresada en el Congreso y con la "ayuda" de los medios de comunicación hegemónicos, pusieron trabas desde el comienzo de su mandato, imponiendo ministros y vetando las medidas económicas que pretendía impulsar, para beneficiar a los sectores más vulnerables,

Las protestas contra el golpe cívico-militar comenzaron en la zona andina y fueron iniciadas por indígenas aymaras y quechuas, campesinos y trabajadores informales. Decenas de carreteras bloqueadas, sobre todo en la sierra sur fueron el escenario para los reclamos: la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente para sancionar una nueva Constitución, fueron los primeros. Luego se añadió el pedido del adelanto de las elecciones para octubre del año en curso. En un sondeo realizado el 29 de enero, por el Instituto de Estudios Peruanos, el 90% de los encuestados manifestó su desaprobación con el Congreso y el 74 expresó que Boluarte debe renunciar. Eso explica cómo las protestas fueron creciendo y abarcan todo el país. La Central de Trabajadores convocó a paros, los estudiantes tomaron universidades y miles de hombres y mujeres se sumaron a la lucha. La represión ordenada por Boluarte comenzó con la Policía Nacional y luego se sumó el Ejército. A poco más de dos meses de protestas hay más de 60 muertos, 48 asesinados por la policía y el ejército (sin que haya nadie denunciado por esos crímenes), más de 1000 heridos muchos de los cuales no han sido atendidos en los hospitales y otros dejaron los centros de salud por temor de ser detenidos.

El 14 de febrero, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de nuestro país, integrada por organizaciones de DDHH y sociales y 2 diputados nacionales, denunció como crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, torturas, persecución judicial, intimidación y amenazas contra la población, por su carácter "sistemático y generalizado". La Comisión concluye que por esos crímenes, el Estado peruano debe ser investigado. Aunque la Comisión pidió entrevistas con la presidenta Dina Boluarte, con el ministro de Justicia, José Tello y con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no fue recibida. Tampoco les autorizaron una entrevista con el detenido presidente Castillo.

La Comisión destaca en su informe la alta dosis de racismo contra la población andina y cómo los medios de comunicación justifican y alientan la represión. Hay una articulación de los poderes del Estado para evitar que la gente denuncie y pida justicia, mientras se siembra el miedo para que no se expresen.

Además de los actores internos que fogonearon el golpe hay que señalar que existe un plan geo-estratégico del imperialismo que pretende recolonizar a los países de América Latina. La presencia de altos mandos militares peruanos implicados en el golpe, todos entrenados en su país por las fuerzas especiales del Comando Sur, en sus bases militares de EE UU y en sus Centros de Operaciones Especiales en territorio peruano que suman un número igual a los que existen en Colombia. Además, la embajadora de EEUU visitó a Boluarte y le expresó el respaldo de su país. Las y los peruanos que se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Lima, denunciaron que fue ella quien impulsó a la presidenta a sacar las tropas para frenar las protestas. Como en otros países de la Patria Grande gritaron muy fuerte: Fuera yanquis de América Latina, Basta de injerencia en la libre determinación de los pueblos.

Además de sus recursos naturales, Perú tiene un valor estratégico para EEUU y la OTAN, por sus fronteras con varios países pero especialmente por el Pacífico Sur, utilizado como centro operativo para abastecer sus navíos.

La heroica lucha y resistencia del pueblo peruano debe ser rodeada de la solidaridad del pueblo argentino. Nos une la gesta sanmartiniana que lo liberó de los españoles, su apoyo a Argentina en la guerra de Malvinas y una cultura compartida por nuestros pueblos originarios. La ONU y la OEA 1guardan un criminal silencio sobre el golpe de Estado en Perú, la reciente VII Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, tampoco lo condenó. Serán nuestros pueblos los que levantarán banderas de unidad para derrotar al imperialismo y a los cipayos que nos someten.

ELENA RIVERO